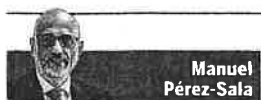


Es responsabilidad de Pedro Sánchez propiciar el consenso que alumbré un proyecto integrador para quienes viven y trabajan en España.

## Reformas para una década decisiva



**Manuel Pérez-Sala**

La crisis generada por el Covid y la deficiente gestión que de ella ha hecho el Gobierno han arrastrado a España hacia la peor recesión de toda la zona euro. El déficit público ha alcanzado el 11% del PIB, el mayor de toda la Unión Europea, situando el endeudamiento público a finales de marzo al borde del 125%. Una losa insostenible que pone en riesgo el Estado de Bienestar tal como hasta ahora lo conocemos, y que compromete el futuro de las próximas generaciones.

Al finalizar el primer trimestre de 2021, más de 200.000 empresas se encontraban al borde de la quiebra, alrededor de 3,65 millones de personas en situación de desempleo y 1,2 millones de personas en situación de inactividad, autónomos por cese de actividad y en ERTE. Muchos de ellos no podrán recuperar el trabajo que tenían antes de empezar la pandemia. Especialmente grave es la situación de los jóvenes, con una tasa de desempleo del 40%, la peor de toda la UE. Esto plantea algunas preguntas: ¿Cómo vamos a pagar las pensiones futuras? ¿Habrá pensiones en el futuro para esos jóvenes? La insolidaridad intergeneracional con los más jóvenes es muy real.

Las graves consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia y de su mala gestión se ven acompañadas de una crisis de gobernanza y de una permanente erosión institucional. Las primeras señales de recuperación no pueden llevarnos a un falso optimismo: una economía que cae un 11% necesita crecer al menos un 12,35% para recuperar su nivel anterior. Claro que vamos a crecer, pero tardaremos más que nuestros vecinos en llegar al nivel

prepandemia. El clima de crispación política no ayuda; mientras otros países como Italia han sabido anteponer los intereses generales a los partidistas, España no. Nuestro país está huérfano de liderazgo.

### Impulso condicionado

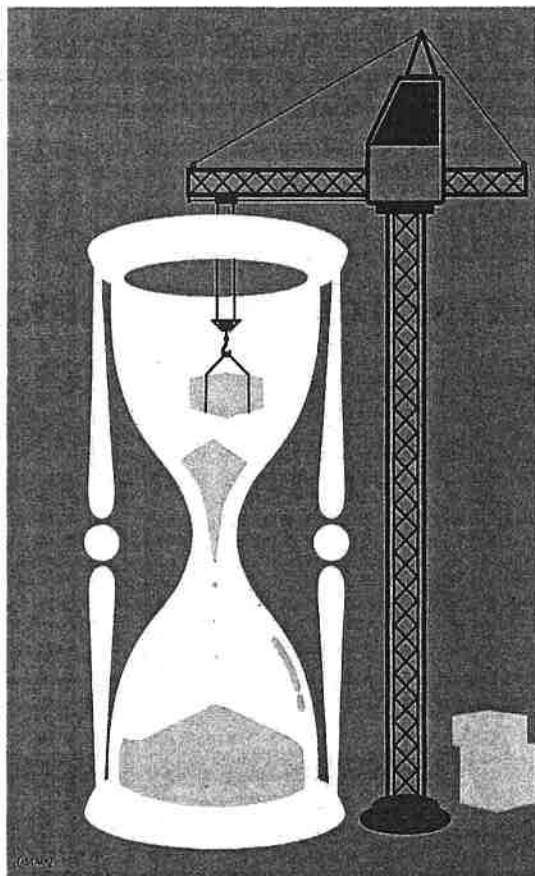
En estas circunstancias, los fondos de ayuda europea, el programa *Next Generation EU* (de los que España recibirá previsiblemente este año 19.000 millones de euros, frente a los 27.000 que el Gobierno había presupuestado en las cuentas públicas de 2021) se presentan como una oportunidad histórica que no se volverá a repetir. El problema, y al mismo tiempo la oportunidad; es que ese impulso europeo está condicionado a una serie de reformas que, para que fueran sólidas y duraderas, deberían ser pactadas entre los principales partidos constitucionalistas.

Como explicamos en el documento del Círculo de Empresarios "España, ante una década decisiva", la reanimación y transformación de nuestro tejido productivo depende de esos fondos. Y esos fondos no son un regalo, sino que comportan una gran responsabilidad. Resulta preocupante que el destino de los fondos no vaya a ser fiscalizado por una agencia independiente y que su distribución quede en manos de una oficina dependiente del presidente del Gobierno.

Nos enfrentamos a una década decisiva en la que tenemos que afrontar una serie de retos fundamentales mediante la aprobación de reformas estructurales.

En primer lugar, la reforma de la Educación, impulsando decididamente la Formación Profesional Dual, adecuando los planes de estudio a las competencias requeridas por el mercado e incentivando la formación continua en las empresas.

La reforma del sistema de pensiones debería ir mucho más allá de ese



**No podemos continuar cargando el ajuste de las pensiones en las rentas de nuestros hijos y nietos**

acuerdo parcial recientemente anunciado, que, si bien adopta algunas medidas para alargar la edad de jubilación, no conseguirá solucionar el grave problema originado por nuestro desequilibrio demográfico. Además, relacionar la revalorización de las pensiones con el índice de precios al consumo provocará un incremento explosivo de la deuda que no se podrá financiar a largo plazo. No podemos continuar cargando, por temor al impacto electoral, el ajuste de las pensiones sobre las rentas de nuestros hijos y nietos.

**Ningún proyecto de país se puede construir de espaldas a una gran parte de los ciudadanos**

La reforma laboral debería permitir acabar con el desempleo crónico, especialmente el juvenil, y eliminar la dualidad entre trabajadores fijos y temporales. Pero para acabar con la dualidad es necesario reducir las indemnizaciones por despido al nivel de países como Alemania, que tiene los menores niveles de desempleo del mundo. Sólo entonces la reducción a tres de las modalidades de contratación (indefinida, temporal y aprendizaje) sería eficaz. Además, hay que mejorar e impulsar las ineficientes políticas activas de empleo.

La reforma de las Administraciones Públicas es urgente para conseguir unos servicios públicos eficientes, en consonancia con los requerimientos de una sociedad exigente y una economía avanzada, que sean motor de la competitividad. Para ello hay que eliminar duplicidades y reducir con determinación el gasto público ineficiente, como viene poniendo de manifiesto la AIREF.

### Transición digital y ecológica

Progresar en la transición digital, mejorando los niveles de digitalización de empresas y Administraciones e incrementando la capacitación digital de la población, es otro de los grandes retos. Y hay que avanzar en la transición ecológica hacia una economía verde y descarbonizada, preservando en todo el proceso la competitividad del modelo productivo, en estrecha colaboración con aquellos sectores que necesitan reconvertirse, como el del automóvil.

Si hacemos todo esto y además nos comprometemos a reducir el déficit público estructural a medio plazo, garantizaremos la sostenibilidad de la deuda y evitaremos que se traslade, en forma de impuestos, a las próximas generaciones. Habremos logrado así establecer las bases de una España mejor para todos. Un proyecto realmente integrador que dibuje un futuro prometedor para quienes viven y trabajan en España.

Para conseguir este objetivo es necesaria una clara voluntad de consenso en el centro del espectro político. Es responsabilidad del presidente del Gobierno propiciarlo, de forma honesta y sincera y, si así fuera, de la oposición aceptarlo. Los problemas de nuestro país son de tal envergadura que, de no lograr ese necesario pacto, habremos perdido una década. Los españoles no nos merecemos esto. Dirigir un país comporta una gran responsabilidad, y quien lo haga debe estar a la altura de la historia. Ninguna pretensión personal justifica condenar a todo un país a la frustración y al desencanto, ningún proyecto de país se puede construir de espaldas a una parte sustancial de los ciudadanos.

Presidente del Círculo de Empresarios